



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00372 00

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Referencia:

Expediente: 11001 33 35 010 **2019 00372 00**
Ejecutante: José Ermides Poveda Tovar
Ejecutada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
Clase: Proceso ejecutivo.

El Despacho procede a pronunciarse sobre la solicitud de librar mandamiento de pago dentro del expediente de la referencia.

Para decidir se **CONSIDERA:**

El título ejecutivo objeto del recaudo está conformado por los siguientes documentos: (i) el acta de la audiencia de conciliación de 12 de octubre de 2017, correspondiente al radicado 87076 de 10 de agosto de 2017, expedida por la Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos Administrativos; y (ii) el auto de 10 de julio de 2018, por medio del cual el Juzgado aprobó la anterior acta de conciliación. Adicionalmente, se anexó a folio 11 del expediente, el certificado expedido por la Secretaría del Juzgado, según el cual que la anterior providencia quedó debidamente ejecutoriada el 16 de julio de 2018.

En la aludida acta de conciliación la administración se obligó a pagar el 100% de las diferencias entre el salario pagado y el reajustado, con aplicación de la prescripción cuatrienal. Igualmente, se obligó a reconocer el 75% de la indexación de las aludidas diferencias. Sin embargo, las partes de la conciliación establecieron condiciones para ejecución del acto conciliatorio, las cuales se redactaron en los siguientes términos:

“La liquidación de que trata el numeral primero [el 100% de las diferencias], será efectuada en un término máximo de 10 meses, contados a partir de ejecutoria del auto aprobatorio de conciliación

Una vez presentada la respectiva solicitud de pago, la cual deberá acompañarse entre otros documentos de la copia integral y legible de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación con su respectiva constancia de ejecutoria, se procederá a conformar el expediente de pago, al cual se le asignará un turno, tal como lo dispone el artículo 35 del Decreto 359 de 1995 o



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00372 00

normas que lo modifiquen y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que exista en el momento, se procederá a efectuar el pago mediante acto administrativo dentro del término legal, se reconocerán intereses a partir del séptimo mes en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Decisión tomada en Sesión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de fecha 29 de Septiembre de 2017. Se adjunta certificación a 2 folios”.

Se sigue del texto que la obligación conciliada está sujeta a las siguientes condiciones: (i) el deudor tiene un plazo de diez (10) meses para hacer la liquidación del capital; (ii) el acreedor debe presentar la solicitud de pago con los documentos arriba citados; (iii) el deudor deberá conformar un expediente y asignar un turno, conforme al Decreto 359 de 1995; (iv) el deudor debe tener disponibilidad presupuestal, (v) el deudor expide el acto de pago; (vi) el deudor realiza el pago dentro del término legal; (vii) el deudor reconocerá intereses a partir del séptimo mes en los términos del artículo 192 del CPACA, esto es, a partir del séptimo mes de la ejecutoria del acto administrativo de pago.

El Despacho considera que se reúnen las siguientes condiciones: (i) han transcurrido el término de los diez (10) meses, contados entre la ejecutoria de la providencia que aprobó el acta de conciliación – 16 de julio de 2018 - y la presentación de la demanda ejecutiva – 24 de septiembre de 2019¹ -, para que la entidad haga la liquidación del crédito (ii) el acreedor solicitó el pago, con los respectivos anexos, mediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2018²; y (iii) el deudor elaboró el expediente y asignó el turno T-3573-2018.

El punto de la disponibilidad presupuestal se examinará de acuerdo a lo manifestado por la administración a través de la Resolución 8908 de 11 de diciembre de 2018³. En su parte motiva, señala “*Que las Cuentas de Cobro relacionadas en este Acto Administrativo se cancelarán con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el año 2018*”. En su parte resolutive, señala que se realizó la apropiación presupuestal en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1o.- Incluir el valor de las Sentencias y Conciliaciones

¹ Según el acta de reparto de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá.

² Obra a folios 8 a 18 del expediente.

³ “Por la cual se adoptan las medidas necesarias para dar cumplimiento a las Conciliaciones y Sentencias en contra del Ministerio de Defensa Nacional con Cuenta de Cobro radicadas ante la Entidad desde el 01 hasta el 30 de Septiembre de 2018”, expedida por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional (folio 4



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00372 00

relacionadas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo, en las apropiaciones presupuestales correspondientes para atender el pago de las citadas Conciliaciones y Sentencias e intereses que se generen.

ARTICULO 2o.- Realizar las medidas necesarias para el cumplimiento de las Conciliaciones y Sentencias en contra del Ministerio de Defensa Nacional relacionadas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.”.

Se desprende de lo anterior, que la entidad deudora había comprometido el presupuesto en el 2018 para el pago de la obligación conciliada. Para el efecto, la entidad debía contar con el certificado presupuestal, pues de lo contrario, no podía haber declarado que se había efectuado la apropiación presupuestal para realizar el gasto. Al respecto, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 dispone: *“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.”*. Por ello, el Juzgado da por cumplida la condición de tener disponibilidad presupuestal para el pago del título ejecutivo contenida en la aludida acta de conciliación.

No obstante, se observa que no se han cumplido las restantes condiciones para exigibilidad del título ejecutivo, a saber: (i) que el deudor expida el acto administrativo de pago, (iii) que pago el pago se haga a más tardar al séptimo mes de la ejecutoria del acto administrativo que ordena el pago.

Así las cosas, el Despacho debe entrar a definir que si las condiciones que faltan por cumplirse para ejecutar a la entidad, tienen la virtud de enervar el mandamiento de pago. En tal sentido, se aprecia que el deudor no puede ser sometido indefinidamente a la llegada del turno para hacer efectivo el pago acordado ante el Ministerio Público y aprobado judicialmente, pues la entidad obligada tenía recursos disponibles en su presupuesto para cumplir la obligación desde el 2018, según el contenido de la Resolución 8908 de 11 de diciembre de 2018.

Incluso, previo a realizar el presente estudio, se expidió el auto de 31 de enero de 2020 con el fin de establecer si había efectuado el pago, pues el turno se asignó en el 2018. El deudor atendió el requerimiento por medio del Oficio OFI-20-14833 de 26 de febrero de 2020. Sin dubitación alguna, la Coordinadora del Grupo



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00372 00

Reconocimiento de Obligaciones Litigiosos y Jurisdicción Coactiva, respondió que no se había efectuado el pago, porque no había llegado el turno. Agregó, que *“se encuentra ejecutando los recursos apropiados para el pago de las solicitudes radicadas en el mes de Abril de 2015 registrándose como último turno pagado el T-4559-2015”*.

El Despacho, considera que el turno no puede convertirse en un obstáculo para realizar el pago de la obligación, dado que existía el compromiso presupuestal desde el 2018 y así lo indicó la parte deudora en una actuación administrativa de la misma vigencia y en ese orden de ideas, debió realizar los trámites pertinentes a fin de reservar los recursos para el pago en vigencias posteriores, si algún trámite impedía cumplir con la obligación de pago en el año 2018.

Así, se concluye que están dadas las condiciones para que librar mandamiento de pago por el 100% del capital y el 75% de la indexación, más no para ejecutar los intereses moratorios. Para el Juzgado, no puede ser de recibo que la administración no honre la obligación, so pretexto de que no ha llegado el turno. Por ello, se ordenará librar mandamiento de pago por el capital y la indexación pactada.

No obstante, el Despacho considera que no se reúnen las condiciones para librar mandamiento de pago por concepto de intereses de mora, pues el acreedor aceptó que la sanción moratoria se imponía después del séptimo mes de la ejecutoria del acto administrativo de pago. Por tal motivo, se negará el mandamiento de pago por los intereses moratorios.

Por lo expuesto, se **RESUELVE:**

PRIMERO. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de **José Ermides Poveda Tovar**, con cédula de ciudadanía 80.386.815 del Colegio (Cundinamarca), y en contra de la **Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional**, por *“el 100% del capital del capital que certifique la respectiva fuerza como resultado de las diferencias entre el salario efectivamente pagado y el resultante del reajuste del 20%, dando aplicación a la prescripción cuatrienal contemplada en el Decreto 1211 de 1990”*, según lo señalado en el acta de la audiencia de conciliación de 12



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00372 00

de octubre de 2017, correspondiente al radicado 87076 de 10 de agosto de 2017, expedida por la Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos Administrativos.

SEGUNDO. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de **José Ermides Poveda Tovar**, con cédula de ciudadanía 80.386.815 del Colegio (Cundinamarca), y en contra de la **Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional**, por el 75% de la indexación, conforme a lo señalado en el acta de la audiencia de conciliación de 12 de octubre de 2017, correspondiente al radicado 87076 de 10 de agosto de 2017, expedida por la Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos Administrativos.

TERCERO. ORDENAR a la **Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional**, que realice el pago a favor de **José Ermides Poveda Tovar** en el término de cinco (5) días, conforme lo establece el artículo 431 del CGP.

CUARTO. NEGAR el mandamiento de pago por concepto de intereses de mora, por las razones aquí expuestas.

QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente mandamiento de pago al representante legal de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, o a su delegado o persona que haga sus veces, y asimismo, al Agente del Ministerio Público, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, diligencia que se realizará de la forma establecida en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 la Ley 2080 de 2021.

SEXTO. DIFERIR el pronunciamiento sobre la solicitud de costas para la debida oportunidad procesal.

SÉPTIMO. RECONOCER al abogado **Joan Manuel Garavito Puentes** como apoderado del ejecutante, conforme al poder conferido a folios 12 y 13 del expediente.

Notifíquese y cúmplase


JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

gpg